

Pereira, 20 de marzo de 2026

Señor

JUEZ DE TUTELA (Reparto)

Pereira, Risaralda

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: ORLANDO DE JESUS JARAMILLO ACEVEDO
actuando como agente oficioso de **BLANCA LIGIA**
JARAMILLO ACEVEDO

ACCIONADO: NUEVA EPS

Yo, **ORLANDO DE JESUS JARAMILLO ACEVEDO** mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 10.136.881, actuando como agente oficioso de mi hermana la señora **BLANCA LIGIA JARAMILLO ACEVEDO** identificada con numero de ciudadanía 41.937.082, me dirijo a usted con el objeto de instaurar **ACCIÓN DE TUTELA**, según lo consagra en el artículo 86 de la Constitución Nacional, contra **LA NUEVA EPS** toda vez que considero se están vulnerando los derechos fundamentales a la **SALUD, VIDA Y DIGNIDAD HUMANA**, fundamento esta acción en los siguientes términos:

HECHOS

1. Actualmente la señora **BLANCA LIGIA JARAMILLO ACEVEDO** es una mujer adulta mayor de 70 años de edad la cual es beneficiaria de la entidad prestadora de salud NUEVA EPS
2. Conforme a Historia clínica ella se encuentra diagnosticada con DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR.
3. Es por las condiciones anteriores que bajo orden medica se indica que le deben suministrar los siguientes medicamentos, OLANZAPINA 10 MG cant. 30, ROSUVASTATINA 20 MG cant 30, MATFORMINA 650MG tab. Cant 30, DIVALPROATO SODICO 500MG (ACIDO VALPROICO 500MG) TABLETA cant 60, DEXLANSOPRAZOL 60mg
4. Advertir que la en múltiples ocasiones se ha incumplido con la entrega del medicamento antes referido, como evidencia de ellos se aportan la cantidad

injustificable de PENDIENTES que la entidad me da, por la no entrega del medicamento, haciendo especial mención a los medicamentos OLANZAPINA 10 MG y DIVALPROATO SODICO 500MG (ACIDO VALPROICO 500MG) TABLETA, ya que estos son medicamentos altamente costosos, que en la mayoría de ocasiones no son entregados y que evidentemente son parte fundamental del tratamiento medico requerido por mi hermana.

5. Mencionar de igual manera que, debido a la edad avanzada de mi hermana, su estado a empeorado, teniendo episodios de recaída en términos de salud, encontrándose en estos momentos en una situación de vulnerabilidad, sin una solución aparente por parte de la EPS
6. Que la señora **BLANCA LIGIA JARAMILLO ACEVEDO**, por su condición de adulta mayor, ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional, lo que impone al Estado y a las entidades del sistema de salud el deber reforzado de garantizarle una atención integral, continua, eficiente y sin barreras administrativas.
7. Así las cosas, a la fecha no se ha llevado a cabo el dicho procedimiento medico, y como puede ver, Señor Juez de Tutela, no disponemos de otro medio o mecanismo para hacer valer nuestros derechos fundamentales, mi hermana se encuentra en una situación muy vulnerable, y la negación sistemática y reiterativa del servicio de salud, me impide un adecuado tratamiento médico garantizándome una VIDA DIGNA. Por consiguiente, sus derechos fundamentales están amenazados y vulnerados, es por ello señor juez que radica la inconformidad y este es el motivo que impulsa la acción de tutela.

DERECHOS QUE SE VULNERAN O AMENAZAN

Es lo primero dejar sentada la posición que la Acción de Tutela incoada se interpone como mecanismo de protección de sus Derechos Fundamentales, contra la omisión desplegada por LA NUEVA EPS

DERECHOS VULNERADOS

SALUD, LA VIDA, DIGNIDAD HUMANA, SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRIDAD PERSONAL Y DEL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Así mismo, la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que el servicio de salud, entre otros, debe obedecer a los principios de continuidad y progresividad “Una de las características de todo servicio público, atendiendo al

mandato de la prestación eficiente (Art. 365 C.P.), la constituye su continuidad, lo que implica, tratándose del derecho a la salud, **su prestación ininterrumpida, constante y permanente, dada la necesidad que de ella tienen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social.** Sobre este punto, la Corte ha sostenido que una vez haya sido iniciada la atención en salud, debe garantizarse la continuidad del servicio, de manera que el mismo no sea suspendido o retardado, antes de la recuperación o estabilización del paciente. **Asimismo, este derecho constitucional a acceder de manera eficiente a los servicios de salud no solamente envuelve la garantía de continuidad o mantenimiento del mismo, también implica que las condiciones de su prestación obedezcan a criterios de calidad y oportunidad.”**

De igual forma en su reiterada jurisprudencia, la Honorable Corte Constitucional ha manifestado la importancia del criterio de necesidad con respecto al tratamiento solicitado por el paciente, pues este no debe tener un carácter caprichoso. Tal principio de necesidad lo establece el médico tratante en su orden o tratamiento a realizar. Sentencia T-345 de 2013 M.P MARÍA VICTORIA CALLE CORREA; “La Corte ha resaltado que, en el Sistema de Salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, **prima facie, el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente.** La importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al concepto del médico tratante se debe a que éste (i) es un profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce de manera íntegra el caso de su paciente y las particularidades que pueden existir respecto de su condición de salud y (iii) es quién actúa en nombre de la entidad que presta el servicio.” (Negrita fuera de texto)” “En relación con el derecho a la salud de las personas que hacen parte del grupo de los sujetos de especial protección constitucional es preciso considerar que a partir de normas constitucionales como los artículos 13, 44, 46 y 47, se impone mayor celo en el cumplimiento de los deberes de protección y garantía por parte de las autoridades y de los particulares en la atención de las enfermedades o alteraciones de salud que padezcan. Dentro de tales destinatarios se encuentran los niños, niñas y adolescentes y las personas de la tercera edad.”

Dicho sea de paso, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en afirmar que los usuarios no pueden ver diezmado su derecho al a SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, por tramites meramente administrativos, o barreras burocráticas, que los imposibilitan a acceder de manera satisfactoria a sus derechos; se debe recordar la sentencia T 188 de 2013 que indicó

“La jurisprudencia de esta Corte al analizar las diferentes vulneraciones al derecho a la salud, ha evidenciado que los usuarios se tienen que enfrentar a múltiples trabas administrativas y burocráticas para poder acceder a la prestación del servicio de salud. Estas barreras atrasan la prestación del servicio, aumentan el sufrimiento de las personas y muchas veces tiene consecuencias

graves en la salud de los usuarios, como las siguientes: a) Prolongación del sufrimiento, que consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento; b) Complicaciones médicas del estado de Salud, esto se debe a que la persona ha tenido que esperar mucho tiempo para recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en el estado de salud debido a que la condición médica empeora; c) Daño permanente, cuando ha pasado demasiado tiempo entre el momento en que la persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que recibe la atención efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto generándole una consecuencia permanente o de largo plazo; d) Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es tal entre el momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe, que la persona se vuelve discapacitada; e) Muerte, esta es la peor de las consecuencias, y se puede dar cuando la falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que reduce las posibilidades de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera urgente ser atendido y por alguna circunstancia el servicio es negado. Sin duda alguna la imposición de barreras administrativas y burocráticas, que impiden la prestación, pronta, adecuada y efectiva del servicio de salud tiene consecuencias perjudiciales en la salud de las personas, y en la medida en que las condiciones del paciente empeoren, necesitará una mejor atención o la prestación de servicios de mayor complejidad, lo que implicará una erogación económica mayor a la inicialmente requerida de haberse prestado el servicio de manera oportuna y con calidad.

El derecho a la salud de las personas mayores o de la tercera edad. Reiteración de jurisprudencia. Sentencia T 264/23.

(...) En relación a la universalidad, otra de las características del derecho a la salud, la sentencia SU-508 de 2020 hizo una aclaración, en el sentido de indicar que, el establecer acciones afirmativas en favor de las personas de la tercera edad, como sujetos de especial protección constitucional, no desconoce ese postulado; en similar sentido, la sentencia T-338 de 2021 señaló que esta parte de la población “afronta debilidades para desarrollar ciertas funciones y actividades. Como consecuencia de ello, estas personas resultan inmersas en situaciones de exclusión en el ámbito económico, social y cultural. De manera que, es necesario adoptar medidas que permitan suprimir esas barreras para garantizar la igualdad material de esa población”.

De la misma manera, la sentencia SU-508 de 2020 indicó que el carácter de especial protección supone “que los derechos fundamentales de los adultos mayores deben interpretarse en concordancia con el principio de dignidad humana y con la Observación General No. 14 proferida por el Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, [instrumento internacional] que orienta la interpretación del derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, consideró que la protección de sus derechos es prevalente. Es decir, tiene una relevancia trascendental. Más adelante, la sentencia T-221 de 2021 sostuvo que los servicios de salud que lleguen a necesitar los individuos en su última

etapa de vida serán garantizados de manera continua, permanente, oportuna y eficiente, en atención, entre otras cosas, al deber de protección y asistencia consagrado en el artículo 46 superior. Recientemente, la Ley 2055 de 2020 incorporó en la legislación interna la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington DC, el 15 de junio de 2015, en la que se resalta “que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas”. También que “la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación”. Recalca en que: “se deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social”. Por tanto, se puede afirmar que hay normas internacionales vinculantes para el Estado colombiano, en materia de protección del adulto mayor y de personas de la tercera edad, en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el de la salud, porque goza de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, en los que la dignidad y la igualdad son inherentes a todo ser humano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y JURISPRUDENCIALES

Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia: consagra el derecho a la salud.

Artículo 2º. Ley Estatutaria 1751 DE 2015 que consagra la Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud.

Artículo 25 Declaración UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, que consagra el Derecho a la salud y al bienestar.

Sentencia T-121/15 - 3.3. Del derecho fundamental a la salud: naturaleza, elementos, principios y derechos que de él emanan. Reiteración de jurisprudencia

Sentencia T-121/15 - SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS-Prestación en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad

Sentencia T-234/13 - DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD LIBRE DE DEMORAS Y CARGAS ADMINISTRATIVAS QUE NO LES CORRESPONDE ASUMIR A LOS USUARIOS.

FUNDAMENTOS DE LA ACCION

Fundo esta acción en lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo establecido por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 y demás normas complementarias y concordantes.

PRETENSIONES

- 1.** Se declare la vulneración y SE TUTELEN los derechos fundamentales a la **SALUD, VIDA, Y DIGNIDAD HUMANA, QUE ASISTEN A LA SEÑORA BLANCA LIGIA JARAMILLO ACEVEDO**
- 2. ORDENAR** a **NUEVA EPS** representada legalmente por quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, PROCEDA A GARANTIZAR, ORDENAR la entrega de los medicamentos denominados **OLANZAPINA 10 MG cant. 30**, **ROSUVASTATINA 20 MG cant 30**, **MATFORMINA 650MG tab. Cant 30**, **DIVALPROATO SODICO 500MG (ACIDO VALPROICO 500MG) TABLETA cant 60**, **DEXLANSOPRAZOL 60mg**, en las cantidades ordenadas por el medico tratante.
- 3. ADVERTIR** a **NUEVA EPS**, tal como lo señaló la Corte Constitucional en su Sentencia T-610 de 2013, “no continuar desconociendo caprichosamente y sin razón válida, los precedentes jurisprudenciales de esta corporación en cuanto a la aplicación de cada una de las subreglas, las cuales propenden por la prestación adecuada y eficiente del servicio de salud”. Recordándole a dicha entidad “el deber de acatar y aplicar todos los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la mencionada materia, pues no se encuentra justificación alguna para que tales entes continúen desconociendo sus deberes.

COMPETENCIA

Es usted competente para conocer de esta acción por la naturaleza del asunto y la calidad del demandado.

ANEXOS

Con el fin de sustentar lo manifestado en la presente solicitud, me permito anexar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de mi cedula de ciudadanía.
2. Fotocopia cedula de ciudadanía Blanca Ligia Jaramillo Acevedo
3. Historia Clínica
4. Orden medica relacionada

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he interpuesto acción de tutela, ni mi representada, ante otra autoridad por estos mismos hechos.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES:

Celular: 3117942156

Correo: orlandojaramilloacevedo@gmail.com

Dirección: Calle 3 casa 88 Barrio León Suarez Corregimiento Alta Gracia

Atentamente,

ORLANDO DE JESUS JARAMILLO ACEVEDO

Cedula de ciudadanía No. 10.136.881 Pereira.